



UGT y CCOO cobran una comisión por cada ERE del 'fondo de reptiles'

● Perciben entre un 0,5 y un 1% de cada prejubilación que paga la Junta ● Los pagos se realizan a empresas participadas por los sindicatos, que facturan gastos de asesoramiento

Viene de primera página
Sólo en el caso de la multinacional Delphi, cuyo cierre motivó un plan especial de ayudas del Gobierno autonómico, las federaciones estatales de UGT y CCOO ingresarán entre 1,2 y 1,3 millones de euros cada uno, según ha podido conocer EL MUNDO en fuentes solventes. Las prejubilaciones de Delphi, según estimaciones oficiales, tendrán un coste final de entre 120 y 130 millones de euros y, en este caso, señalaron las fuentes consultadas por este periódico, los sindicatos y la Junta de Andalucía pactaron una comisión del 1%.

«Los compromisos de pagar comisiones a los sindicatos no están reflejados en ningún documento», explicaron las fuentes. Son acuerdos verbales entre las centrales sindicales y la Consejería de Empleo, que incluye estas comisiones en los gastos de gestión de los ERE y, por tanto, en el montante final de las pólizas de seguros de rentas para prejubilados.

Los sindicatos reciben el dinero a través de empresas participadas que emiten facturas por asesoramiento y gestión en la tramitación de los ERE. Algunas de estas empresas son corredurías de seguros y otras se dedican a realizar estudios de mercado.

Hay que recordar que la Junta de Andalucía ya paga a un broker o mediador -las fuentes señalan que en torno a otro 1%- por realizar el cálculo actuarial de cada prejubilado -lo



El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, saluda cariñosamente al líder andaluz de UGT, Manuel Pastrana, en los pasillos del Parlamento andaluz. / F. RUSO

Cada sindicato podría haber cobrado de 3,5 a 7 millones de la Junta en diez años

que les correspondería cobrar hasta alcanzar la jubilación-, estimar el coste total del ERE y buscar la mejor oferta entre las aseguradoras que operan en el mercado. Fuentes próximas a la investigación de la trama de los ERE afirman que los sindicatos, en la práctica, «cobran por facilitar a los brokers los datos de los trabajadores» de modo que se puedan calcular los importes de las pólizas.

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, ha dicho en el Parlamento que no consta ningún «pago directo» de la Junta a ninguno de los brokers o mediadores que intervinieron en los ERE. De ese modo, ciñéndose estrictamente a la contabilidad de la Junta de Andalucía, la consejera elude entrar en el fondo del asunto: la Comunidad Autónoma ingresa el dinero en las cuentas de las compañías aseguradoras con las que se han contratado las pólizas y éstas son las que le pagan a los mediadores. Finalmente, estos brokers que han gestionado el ERE son los que ingresan las comisiones a los sindicatos.

La juez Alaya convoca a la Junta a las 13.30

Sevilla
La juez que investiga la trama de los ERE, Mercedes Alaya, ha convocado esta tarde al letrado de la Junta de Andalucía para que ratifique su negativa a entregar las actas del Consejo de Gobierno y plantear en tal caso un conflicto de jurisdicción.

La juez ha convocado personalmente al abogado a las 13.30 horas para que «se pronuncie si mantiene su requerimiento de inhibición» a la vista de su auto del 30 de marzo, cuando acotó el tipo de documentos que requiere a la Junta y le reprochó la falta de colaboración.

En dicho auto, la ma-

gistrada lamentó haberse enterado por la prensa, «y no por escrito como correspondería a una parte personada», de la negativa de la Junta a entregar las actas del Consejo de Gobierno desde 2001, a la vez que expresó su extrañeza por ese comportamiento de una Administración «personada como

perjudicada, como acusación particular y con un publicitado ánimo de colaborar con la justicia».

«No está en el ánimo de esta instructora obligar a la Administración a develar extremos que sean materia reservada», dice en su auto, pues la juez no tiene «ningún interés, con la

sobrecarga que pesa sobre este juzgado, de examinar más documentación de la necesaria».

Añade que «en cualquier caso, resulta paradójico que durante diez años la Junta no haya detectado las graves irregularidades que se estaban cometiendo con los fondos públicos y que ahora se extrañe de que el juez que investiga quiera conocer los motivos».

Además, los mediadores no realizan los pagos a CCOO y UGT como tales, sino a sus propias agencias de corretaje de seguros. En el caso de CCOO, la correduría propia es Atlantis Asesores SA, empresa participada al 100% por el sindicato; en el de UGT, la correduría suele ser Asesoramiento en Seguros y Previsión Atlantis SA, participada por el sindicato en un 20%. En el caso de UGT hay una segunda empresa, Temiqui SA, controlada al 100% por el sindicato y dedicada a «estudios de mercado», que también ha recibido comisiones.

Las fuentes consultadas por este periódico indican que estas empresas no realizan ningún papel real en la gestión de los ERE. «Esto se ha hecho así desde tiempo inmemorial; esto ya existía en los años 90», indica un colaborador habitual de la Junta de Andalucía.

Incluso, aseguran que, si no existiera la comisión que perciben los

sindicatos, sería «muy difícil» que los ERE se cerraran con acuerdos entre las empresas y los trabajadores. En otras palabras, «es el precio de la paz social», llegan a afirmar las fuentes, que explican que sólo CCOO y UGT cobran las comisiones con el argumento de que «los otros sindicatos se niegan a firmar los ERE. Si CGT y USO no quieren firmar, pues no son necesarios».

En este punto hay que recordar que fue USO el sindicato que destapó el fraude pretendido en el ERE de la Base de Morón, donde se incluyeron 31 intrusos con la anuencia de las centrales mayoritarias y la autoridad laboral.

El flujo del dinero comienza con una transferencia corriente desde el Presupuesto de la Consejería de Empleo a las arcas de la Agencia IDEA -antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA)-, uno de los entes instrumentales de la Junta.

Ese traspaso de fondos -que se justifica con un convenio firmado en 2001 entre la Consejería de Empleo y el IFA- permitía «agilizar» la concesión de ayudas a empresas en crisis, pero en la práctica lo que se producía, según corrobora la Policía Judicial y apunta la juez Alaya, era una evasión de la normativa de subvenciones, de los controles y de la fiscalización previa del gasto.

Una vez que la Consejería de Empleo decidía financiar un ERE, un broker intervenía para realizar los cálculos actuariales, realizar las gestiones a los afectados ante la Seguridad Social y elegir la mejor oferta entre las aseguradoras del mercado. En el coste total de la póliza se incluían las comisiones a pagar a los sindicatos, como gastos de gestión del expediente.

Cuando todos los trámites se cerraban, se produce el momento del pago. Lo habitual no es que la Junta

pague de una vez sino en varios pagos aplazados. Periódicamente, la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social emitía órdenes -unas veces directamente a la aseguradora elegida, otras a través de la Agencia IDEA- para que determinadas cantidades de la partida 311 o fondo de reptiles se ingresaran en la cuenta corriente de la aseguradora. En esas resoluciones con órdenes de pago se especificaban las pólizas a las que debían destinarse esas cantidades.

Cuando la aseguradora recibía el documento de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social remitía una copia al broker que había realizado el corretaje, para pagarle su parte correspondiente a los gastos de gestión. Este porcentaje podía llegar hasta el 7% del coste de los ERE, según las fuentes consultadas por este periódico.

Una vez que el broker tenía en su poder el documento, enviaba sendas



copias a CCOO y UGT para que supieran qué cantidad les correspondía percibir y que, en función de lo pactado, sería entre un 0,5 y un 1% del pago ordenado por la Consejería de Empleo. El ingreso del dinero no se realizaba hasta que la Junta de Andalucía pagaba a la aseguradora y ésta, a su vez, transfería al mediador el porcentaje correspondiente a los gastos de gestión.

Los sindicatos apenas se han pronunciado sobre la trama de los ERE de la Junta de Andalucía y cuando lo han hecho ha sido para alabar a la Administración.

Ha sido el caso del secretario general de la UGT, Cándido Méndez, quien a mediados de marzo alabó la «celeridad» y la «diligencia» del Gobierno de José Antonio Griñán a la hora de remitir a la Justicia la documentación requerida sobre el caso. Una semana después de esa declaración, la juez Alaya emitió un auto en el que censuraba la «falta de colaboración» y le daba un plazo máximo de 48 horas para remitir los documentos que le había solicitado.

UGT-A tampoco se ha prodigado en declaraciones sobre la trama de los ERE. Hace unas semanas, los periodistas le preguntaron a su secretario general, Manuel Pastrana, sobre la conveniencia de una comisión de investigación en el Parlamento de Andalucía y, en consonancia con la tesis que defiende el Gobierno de Griñán, se negó a tal posibilidad.

Hay que recordar que entre los intrusos o falsos prejubilados en empresas que han percibido pensiones con cargo a la Junta de Andalucía hay un grupo de sindicalistas de UGT, algunos de ellos trabajadores de la central sindical.

De hecho, la Policía Judicial considera que la «persona clave» de la trama de los ERE es un exsindicalista jienense, Juan Lanzas, que fue secretario de Organización de UGT de Jaén y secretario general de la Federación de Alimentación, Bebidas y Tabaco de UGT-Andalucía entre 1997 y 2002. A partir de ese momento, según la investigación, se dedicó a la intermediación en ERE, cobrando, presuntamente, comisiones en forma de pólizas y por informes de asesoría.

EL MUNDO ha intentado sin éxito conocer la versión de CCOO y UGT sobre estos cobros de comisiones, cómo están contratadas y en concepto de qué se perciben.

Los dos sindicatos ingresarán al menos 2,4 millones por las prejubilaciones de Delphi

UGT y CCOO pactaron una comisión del 1% para cada uno sobre el montante de la póliza, que supera los 120 millones / Fueron excluidas las dos centrales más 'críticas'

S. TORRES / A. SALVADOR
Sevilla

Los sindicatos UGT y CCOO cobrarán al menos 1,2 millones de euros cada uno por su participación en la negociación del plan social con el que la Junta ha tratado de minimizar el impacto tras el cierre de la factoría gaditana de Delphi, una de las crisis laborales más costosas para el presupuesto público de los últimos años.

EL MUNDO de Andalucía ha podido conocer en fuentes de toda solvencia que estos dos sindicatos pactaron verbalmente con la Consejería de Empleo el cobro de una comisión del 1 por ciento sobre el volumen total de las prejubilaciones. Fueron excluidos de forma intencionada las otras dos secciones sindicales con representación en la antigua multinacional, CGT y USO.

Las fuentes dijeron que el montante de la póliza de seguro de rentas oscilará finalmente entre los 120 y 130 millones de euros, con lo que los dos sindicatos mayoritarios —escasamente críticos ante los reiterados incumplimientos de la Junta sobre los planes de reindustrialización de la Bahía de Cádiz— se garantizarían entre 1,2 y 1,3 millones cada uno en cuatro años.

La secuencia de cobro es la siguiente. La compañía aseguradora con la que se formalizó la póliza de seguro de rentas —el pool La Caixa-Generali, en el caso de Delphi— paga a la empresa mediadora y es entonces cuando ésta abona la comisión pactada a cada sindicato. No hay un documento donde se recoja por escrito ese compromiso. Es un acuerdo verbal. Palabra de caballeros.

La comisión del 1% no es la más frecuente. En la mayor parte de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) financiados por la Junta de Andalucía, según ha podido conocer este periódico, se ha



Chaves negocia con los líderes de UGT-A y CCOO-A y los representantes sindicales de Delphi en mayo de 2007. / C. MÁRQUEZ

UGT y CCOO no han sido nada críticos con los incumplimientos del Gobierno andaluz

venido pagando una comisión del 0,5%. Habitualmente la perciben las federaciones estatales de UGT y CCOO, no la territorial andaluza.

Supuestamente, el dinero que se paga a los sindicatos se justifica como 'asesoramiento', al chequear los cálculos actuariales —el dinero que cobrará el trabajador hasta que alcance la jubilación— que realiza la empresa de previsión social.

No obstante, fuentes del sector

insinuaron que, en la práctica, es una vía encubierta de financiación del sindicato y un modo de resarcirse por los gastos derivados de asistencia a reuniones y flete de autobuses por manifestaciones.

En julio de 2007, meses antes de las elecciones autonómicas y generales de 2008, los gobiernos central y autonómico asumieron diversos compromisos con la plantilla de Delphi tras el cerrojazo a la factoría puertorrealense y las sonoras movilizaciones que éstos secundaron.

Entre otros acuerdos, el entonces Ejecutivo de Griñán se comprometió a atraer empresas para absorber la mano de obra y a buscar una salida al colectivo de trabajadores que, por razón de edad, tenían más complicada la reinserción laboral. Ello se ha traducido

en el pago de prejubilaciones a los extrabajadores hasta que cumplan la edad de jubilación ordinaria.

A día de hoy, 659 antiguos operarios de la multinacional estadounidense —620 de la matriz y 39 de la industria auxiliar— se han prejubilado. A éstos se suman 75 invidentes, complementándole la Junta del 55 al 75 por ciento de su renta.

Se da la circunstancia de que Comisiones Obreras y UGT son los dos sindicatos menos reivindicativos ante los reiterados compromisos incumplidos por la Junta, que garantizó una salida laboral a todos los antiguos trabajadores de Delphi.

Casi cuatro años después, aún queda un tercio de la plantilla por recolocar. Mientras tanto, siguen recibiendo formación, un proceso que ha costado ya más de 76,6 millones.



MATACÁN
JAVIER
CARABALLO

Tralará

«Ahora que vamos despacio, vamos a contar mentiras. Tralará. Por el mar corren las liebres, por el monte las sardinas». Y Zapatero no ha renunciado a ser candidato porque la presión de las encuestas lo haya vapuleado, ni porque la baraka que lo aupó se haya transformado en badana que le zurra. Zapatero, que corre por el mar como las sardinas, ha renunciado a presentarse a candidato por tercera vez porque ya lo tenía pensado. Hace años que lo tenía pensado, desde que llegó a la presidencia lo sabía. Y se lo había callado. Renuncia porque quiere darnos a todos una lección de democracia. Con ocho basta. Se va por un sentimiento profundo de renovación, de modestia, de saberse pres-

cindible como todos los demás. Cualquiera puede ser presidente, Sonsoles, y cualquiera puede dimitir en un fin de semana de abril. Tralará.

«Ahora que vamos despacio, vamos a contar mentiras. Me encontré con un ciruelo, cargadito de manzanas. Tralará». Y Zapatero no se va porque los suyos lo hayan presionado, porque los candidatos se hayan hartado de que en los mítines les invoquen el desastre de Zetapé con más fulgor que la foto de las Azores, porque su imagen se haya transformado en un remedo de la inutilidad, del engaño, de la torpeza, de la impostura. Zapatero no se va porque sea un lastre para los suyos, que ahora le aplauden a rabiar a los mítines a los que acude porque saben que ya se ha ido, y en España no hay nada que guste más que aplaudirle a un muerto camino del cementerio. En la política es igual. Como si en cada palmetada esbozaran un suspiro por el susto que han pasado de pensar que seguiría de candidato. No, Zapatero se va por un sentimiento profundo de deber con España, porque es lo

mejor para el país, porque sólo un patriota como él es capaz de inmolarse con las reformas que nadie se atrevería en beneficio del futuro de su país. Porque sólo un estadista como él sabe que la estabilidad final de la economía la otorga un sacrificio en plena plaza pública. Tralará.

Sólo un patriota como él es capaz de inmolarse con reformas con las que nadie se atrevería... Tralará

«Me encontré con un ciruelo, empecé a tirarle piedras, y caían avellanas. Tralará». Que Zapatero no se va porque del zapaterismo ya no quede nada, porque aquel castillo de naipes se haya derrumbado con el primer soplo de los problemas económicos; de los problemas sociales. Zapatero, tralará, se marcha porque España necesitaba ofrecer-

le al mundo un ejercicio completo de democracia, de primarias. Cualquiera que analice un país en crisis diría lo mismo, que lo importante es que el Gobierno se descabece, que permanezca un año sin liderazgo y que se abra en canal ante la sociedad con un debate de elecciones primarias. Eso es lo que conviene, ése es el final de Zapatero, un adiós anticipado y un futuro incierto. Lo mejor para combatir la crisis que nunca existió. Tralará.

«Niño, no tires piedras, que no es mío el melonar, que es de una señora viuda que se acaba de casar. Tralará». Porque se va Zapatero y en Andalucía ya todo se ha solucionado, que el escándalo de los Eres ya encuentra su final. Que el problema era el presidente de la baraka, el que ya se ha ido. Ahora que se ha quitado ese tapón, ya todo irá mejor; ya todo se olvidará. Lo de los Eres lo dice su conjugación, es pasado; tampoco las prejubilaciones amañadas ni los sindicatos cobrando su comisión. Que ahora Griñán podrá subirse tranquilo a un ciruelo a coger manzanas. Tralará.